

San Miguel, quince de julio de dos mil veintidós

VISTOS:

En estos autos RIT 659-2021, RUC 2140351175-4, del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, sobre despido indirecto, nulidad de despido y cobro de prestaciones, por sentencia definitiva de fecha 11 de mayo de 2022, dictada por la juez suplente doña Carolina Carreño Lara, se acogió parcialmente la demanda interpuesta por doña Magdalena Alejandra Lara Recabarren en contra de Comercializadora de Productos Química Zero Limitada, representada legalmente por don Patricio Castro Miranda, y se condenó a la parte demandada a pagar a la actora las prestaciones que se detallan en el fallo.

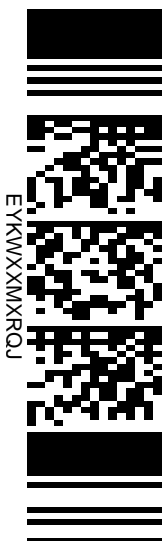
En contra de la referida sentencia, el abogado Alejandro Samuel Birman Polanco, por la demandada Comercializadora de Productos Químicos Zero Ltda, dedujo recurso de nulidad, invocando como causales la del artículo 478 letra b) y, en subsidio, la del artículo 477 en aquella parte que hace procedente el recurso de nulidad cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con los artículos 171 y 162 , todos del Código del Trabajo.

Solicita se acoja el recurso, se anule la sentencia recurrida y se dicte sentencia de reemplazo que rechace la demanda de despido indirecto en todas sus partes, con costas.

La Sala Tramitadora de esta Corte, por resolución de 2 de junio de 2022, declaró admisible el recurso deducido, llevándose a cabo la audiencia pública para su conocimiento el pasado 7 julio, oportunidad en que se escucharon alegatos de ambas partes.

CON LO OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, don Alejandro Samuel Birman Polanco, por la demandada Comercializadora de Productos Químicos Zero Ltda.,

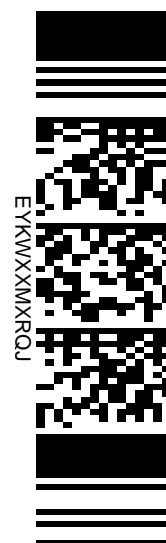


sostiene en su libelo de nulidad que la sentencia en cuestión ha incurrido en la causal de invalidación contemplada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, haberse dictado la sentencia con infracción manifiesta a las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. En subsidio, invoca la del artículo 477 en aquella parte que hace procedente el recurso de nulidad cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con los artículos 171 y 162, todos del Código del Trabajo.

Peticiona en razón de ello que se acoja el recurso de nulidad interpuesto conforme las alegaciones principales o subsidiarias, se invalide la sentencia del tribunal de primer grado y se dicte sentencia de reemplazo que rechace la demanda de despido indirecto en todas sus partes, con costas.

SEGUNDO: Que, para dilucidar el arbitrio impetrado, debe tenerse presente que el recurso de nulidad introducido en el Código del Trabajo, según sea la causal invocada, tiene por objeto o asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales o bien conseguir sentencias ajustadas a la ley, conforme fluye de las causales contenidas en los artículos 477 y 478 de dicho código que lo hacen procedente, arbitrio legal que tiene el de carácter extraordinario, tanto por la excepcionalidad de los presupuestos que configuran las referidas causales, atendido el fin que persiguen restringiendo el ámbito de revisión por parte de los tribunales de alzada, cuanto por imponer al recurrente la obligación de precisar con rigurosidad sus fundamentaciones.

TERCERO: Que, para fundar la causal de nulidad prevista en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo invocada, la parte demandada alegó que la sentencia recurrida ha sido pronunciada con infracción manifiesta y evidente de las normas de apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, toda vez que se ha apartado de las reglas de las



máximas de experiencia y adolece de falta de fundamentación y de análisis de la prueba aportada por su parte.

Señala que incorporó como prueba documental números 4 y 5 los certificados correspondientes al pago de las cotizaciones previsionales por el periodo de enero 2020 a diciembre 2020 y de enero 2021 a agosto 2022, respectivamente.

Expone que dicha documentación que detalla y analiza da cuenta de que el periodo, que según la sentenciadora no estaba pagado, incluída todas las fechas, sumadas al AFC de junio de 2021, si se encontraban completamente pagadas las correspondientes cotizaciones previsionales, por lo que la apreciación de dicha prueba fue prácticamente nula. Añade que la sentenciadora no analizó la prueba aportada por su parte, ya que en ella se establece claramente que figuran pagados todos los meses mencionados en la demanda y la carta de autodespido.

Argumenta que las máximas de la experiencia en un sistema probatorio de la sana crítica que como parámetro racional es relevante, teniendo presente su triple función: sirve de método para descubrir la verdad (función heurística), método para determinar la verdad (función epistémica) y para justificar o motivar la sentencia (función justificativa). En síntesis, sirve de guía y límite para el razonamiento del juez.

Refiere que el autor Friedrich Stein en su texto, El Conocimiento Privado del Juez, señala que las máximas de la experiencia *“corresponden a definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se ha inducido y que, por encima de estos casos, pretenden tener validez para otros nuevos.”*



Indica que estas definiciones o juicios hipotéticos son herramientas del razonamiento que sirven de premisas mayores en las inferencias que hace el juez para colegir un hecho desconocido, es decir permiten presuponer la presencia probable de un consecuente, conectando un hecho conocido con otro desconocido. Agrega que, inmersa en esta dinámica junto a las premisas mayores (máximas de la experiencia) están las premisas menores, es decir los medios de prueba, los que juntos, permiten al juez llegar a un hecho desconocido.

Arguye que la definición o concepto de máximas de la experiencia no es de carácter amplio, sino que *restringido*, atento que existen ciertos juicios o definiciones hipotéticas que no se basan en reglas generales, en verdaderas generalizaciones, sino que en prejuicio, estereotipos o asunciones que carecen de todo fundamento cognitivo que se hacen en base a un supuesto sentido común, que no tienen suficiente confirmación empírica adecuada o científica, escondiéndose un prejuicio del juzgador, juicios denominados por la autora Michele Taruffo, como *generalizaciones radicalmente espurias*, que recoge el autor Javier Maturana Baeza.

En síntesis, sostiene que la restricción para que los juicios o definiciones hipotéticas, sean máximas de la experiencia, es que deben basarse en generalizaciones con suficiente confirmación empírica adecuada o científica, lo contrario es una generalización radicalmente espuria, el coloquial sentido común.

Concluye a este respecto que un primer control del tribunal *ad quem*, por la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, es despejar o clarificar la naturaleza del juicio hipotético usado por el Tribunal *a quo* en la sentencia, desde un punto de vista binario, o es verdaderamente máxima de la experiencia o una generalización radicalmente espuria, ya que la segunda no es verdadera guía de razonamiento del juez y en la medida que esta concurra en la sentencia,

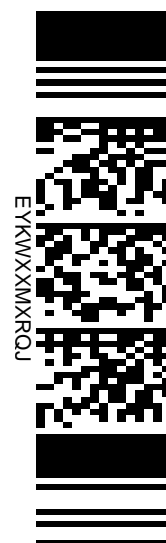


deba anularse para velar por el uso de los parámetros racionales sancionados por el legislador procesal laboral, dentro de los cuales no están las *Generalizaciones Radicalmente Espurias*, el coloquial sentido común o aquello que resulta evidente.

Agrega que, un segundo control del Tribunal *ad quem* por la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, es que el Tribunal *a quo* en caso de llegar a una conclusión, sin expresar en su razonamiento por qué no aplica una regla de la máxima de la experiencia, es decir, un juicio hipotético generalizado suficientemente comprobado por la ciencia o la empírica, la sentencia adolece de una falta de fundamentación, por infracción a las reglas de las máximas de la experiencia, sin perjuicio de una infracción clara a las reglas de la lógica o de los conocimientos científicamente afianzados.

Sostiene que la sentencia adolece de forma manifiesta de una infracción a las reglas de la sana crítica, respecto de las máximas de la experiencia y que no se apreció la prueba de la demandada que demuestra el pago de las cotizaciones previsionales reclamadas.

CUARTO: Que, respecto de la causal de nulidad consagrada en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, cabe señalar que, bajo el sistema de la sana crítica, la regla de valoración es escogida y definida por el juez, quien tiene atribuciones para elegir el material probatorio, jerarquizarlo y ponderarlo. Sin embargo, es la misma ley la que coloca límites a esa actividad, desde que concibe un método de valoración racional de la prueba, que supone la existencia de ciertas pautas reguladoras que no pueden contrariarse y que están dadas por las reglas de la sana crítica. A nivel normativo, estas restricciones surgen de la interrelación de dos disposiciones legales: el artículo 456 del Código del Trabajo, que prescribe la clase de razones que ha de expresar el tribunal en la apreciación de la prueba y que constituye una guía para el convencimiento racional; y el artículo 478 letra b) del mismo cuerpo legal



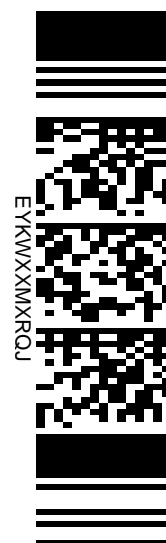
que permite la anulación del fallo cuando éste ha sido pronunciado con infracción a la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, las que se ha entendido que corresponden a las reglas de la experiencia, de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados. Dentro de las reglas de la lógica encontramos los principios de identidad, no contradicción, el del tercero excluido y el de la razón suficiente, según el cual, para ser verdadero, todo juicio necesita de una razón suficiente.

QUINTO: Que, para dilucidar si existe en la especie la infracción denunciada, es menester analizar la forma en que el tribunal llegó a la conclusión que la demandada incurrió en los incumplimientos graves a las obligaciones del contrato que la actora denunció en la carta de auto despedido y en la consecuente demanda.

En el considerando séptimo del fallo que se revisa se analiza cada uno de los incumplimientos en que se sustentó el despido indirecto, y en lo que interesa a este recurso, esto es, aquellos incumplimientos que se tuvo por acreditados, éstos corresponden al no pago de AFC del mes de junio de 2021 y el no pago íntegro de cotizaciones previsionales durante los meses de enero a junio de 2021.

Así, se señala, en primer lugar, que: *“En cuanto al segundo incumplimiento, del examen del certificado de cotizaciones de AFC Chile S.A. también emitido en la data antes indicada, se advierte que el mes de junio de 2021 no registra pago.”*

En segundo lugar, se establece lo siguiente: *“En lo relativo al tercer y último incumplimiento contractual imputado a la empleadora, a partir de los certificados antes mencionados y aquél emitido por A.F.P. Provida S.A. el 27 de julio de 2021, no es posible concluir que los montos cotizados en el período comprendido entre los meses de enero a junio de 2021 correspondan a la remuneración efectivamente percibida por la demandante, sin que la parte demandada haya acreditado la debida concordancia entre las sumas retenidas por tal concepto en las*



liquidaciones de remuneraciones pertinentes y aquéllas enteradas en las respectivas instituciones previsionales. No obstante lo anterior, en lo que dice relación con el mes de julio de 2021, es dable tener presente que dada la fecha de emisión de los respectivos certificados -29 y 27 de julio de 2021 respectivamente-, es evidente que en ellos no podría haberse consignado su pago, pues el plazo para cumplir con tal obligación aún se encontraba vigente a esa data.”

SEXTO: Que de lo anterior se sigue que el juez resolvió en base a la prueba aportada por la actora y específicamente con el certificado emitido por AFC Chile el 29 de julio de 2021 y aquel emitido por AFP Provida el 27 del mismo mes y año, concluyendo, en el considerando octavo lo siguiente: *“Que de lo anteriormente establecido, resulta inconcuso que la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, prevista en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, al tenor de los medios probatorios allegados al proceso por la parte demandante y en lo que se refiere a la falta de pago íntegro de las cotizaciones de seguridad social relativas a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021, fue suficientemente acreditada en estos autos; incluso el mes de junio de 2021 ni siquiera aparece mencionado en el certificado emitido por AFC Chile en su oportunidad.”*

SÉPTIMO: Que, la apreciación conforme a las reglas de la sana crítica permite al tribunal liberarse de la rigidez de la prueba valorada para buscar la verdad dentro del conflicto, pero ello ha de hacerse sobre la base de un análisis razonado y explicitado en la decisión, atendiendo a las leyes de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicos. Dicho análisis debiera considerar aisladamente los medios probatorios, a fin de precisar su eficacia y pertinencia, para luego valorarlos conjuntamente y contrastarlos, extrayendo las conclusiones pertinentes en cuanto a los hechos, en un proceso racional que permita la decisión del asunto.

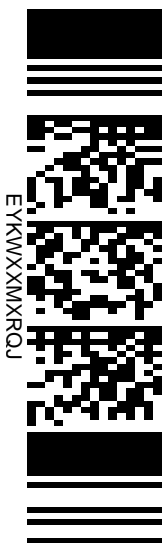


OCTAVO: Que, en la especie, se advierte una enumeración de los medios de prueba de ambas partes en los considerandos cuarto y quinto, y luego una enunciación de las pruebas de la actora que le habrían permitido arribar a las conclusiones que indica, pero no hay un análisis razonado y explicitado en la decisión, de cada medio de prueba en particular, ni una valoración conjunta y contrastada con aquella prueba aportada por la demandada, que atienda a las máximas de experiencia, lógica y conocimientos científicamente afianzados.

Así, en lo tocante al no pago del AFC correspondiente al mes de junio de 2021, y conforme se lee del certificado agregado como prueba número 5 de la parte demandada, éste fue pagado el 16 de agosto de 2021, es decir, después de la carta de auto despido, pero antes de la interposición de la demanda de autos.

Por su parte, en relación con la falta de pago íntegro de las cotizaciones de seguridad social relativas a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2021, cabe señalar, en primer término, que obra en el proceso la prueba aportada por la demandada correspondiente al certificado de PREVIRED, el que no fue analizado por la sentenciadora, y que da cuenta de que éstas se encuentran todas pagadas, sin que sea posible establecer nítidamente que ellas no son íntegras, máxime si se tiene presente que la actora, según contrato de trabajo aportado por ambas partes, tenía una remuneración variable compuesta por un sueldo base, semana corrida, gratificación, comisiones y bonos. Tampoco hay constancia a este respecto que la actora haya denunciado alguna diferencia a su respecto ante la Inspección del Trabajo, cosa que sí había hecho en el año 2019, conforme da cuenta la respuesta del oficio de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, Ord. N°38 agregado a estos autos.

El sentenciador establece que *“no es posible concluir que los montos cotizados en el período comprendido entre los meses de enero a*



junio de 2021 correspondan a la remuneración efectivamente percibida por la demandante, sin que la parte demandada haya acreditado la debida concordancia entre las sumas retenidas por tal concepto en las liquidaciones de remuneraciones pertinentes y aquéllas enteradas en las respectivas instituciones previsionales.” Sin embargo, tampoco es posible concluir que dichos montos sean inferiores a la remuneración percibida y que es lo que constituye el incumplimiento grave denunciado, o al menos el sentenciador no analiza la prueba para efectos de establecer, conforme a las normas de la sana crítica, que tal monto sea efectivamente inferior, y de serlo, si ello es de una entidad tal que permita constituir un incumplimiento grave en los términos requeridos por la norma cuya aplicación se invoca.

NOVENO: Que, así, no se conforma a los principios de la lógica el fallo que se funda –de hecho- en una prueba no rendida, sin verificar si con la que efectivamente se acompañó podría haberse llegado a la misma conclusión o a una distinta. Máxime si la falencia probatoria se le reprocha a la demandada, en circunstancias que, como bien se señala en el considerando sexto de la sentencia, le correspondía a la actora acreditar los hechos señalados en la carta de autodespido. Ello constituye una infracción manifiesta a las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, en los términos que establece el artículo 456 del Código del Trabajo.

A mayor abundamiento, a este respecto la carta de despido es confusa por cuanto, por un lado, en el punto 1 letra a) se sostiene que se encuentran impagas las cotizaciones de FONASA correspondientes a enero, febrero, marzo, mayo, y junio de 2021 y en la letra b) del mismo numeral se indica que no se encuentra pagado el AFC de junio de 2021. Por su parte, en el punto 2 de la misma misiva se sostiene que no se encuentra cotizado íntegramente ante la AFP Provida, Fonasa y AFC por los períodos comprendidos entre enero a junio de 2021. A su vez, la



demanda de autos tampoco aclara tal contradicción, esto es, si se trata de un no pago o una falta de pago íntegro, al señalar, en lo pertinente: *“AFC: No pago mes de Junio de 2021. Pago no íntegro desde Enero a mayo de 2021. Fonasa: No pago de los meses Enero a Junio de 2021.”* Además, nada se dice en el libelo respecto de los pagos correspondientes a la AFP Provida.

DÉCIMO: Que, por lo precedentemente expuesto, la sentencia que se revisa adolece del vicio previsto en el artículo 478 letra b), y, habiéndose acogido el recurso por esta causal, resulta innecesario pronunciarse acerca de las demás alegaciones efectuadas por la recurrente en la causal de nulidad interpuesta en forma subsidiaria.

Por estos fundamentos, lo previsto en las normas legales precitadas y en los artículos 477, 479 y 482 del Código del Trabajo, se declara:

Que, se **ACOGE** el recurso de nulidad, por la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, deducido en representación de la demandada Química Zero Limitada contra de la sentencia de once de mayo de dos mil veintidós dictada en autos RIT 659-2021 del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel y, declarándose **NULO** dicho fallo, se procede a dictar a continuación sentencia de reemplazo.

Redacción de la abogada integrante señora Yasna Bentjerodt Poseck.

Regístrese y devuélvase.

N° Reforma Laboral 260-2022.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

San Miguel, a ... de julio de dos mil veintidós.



Atendido lo resuelto en la sentencia de nulidad que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 482 del Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue:

VISTOS:

Se reproduce la sentencia anulada, con las siguientes modificaciones:

- a) Se eliminan los párrafos 2° y 3° del considerando séptimo.
- b) Se elimina el considerando octavo.
- c) Se eliminan los párrafos 2°, 3° y 4° del considerando décimo.
- d) Se eliminan los considerandos undécimo al vigésimo.
- e) Se elimina la parte resolutive.

Y TENIENDO EN SU LUGAR Y ADICIONALMENTE PRESENTE:

PRIMERO: Que, lo relevante del "despido indirecto", como lo ha denominado la doctrina y la jurisprudencia, es que hace responsable al empleador de la pérdida de la fuente laboral del trabajador, resguardando de alguna manera el principio de estabilidad en el empleo, en virtud del cual el legislador regula las causales de terminación del contrato de trabajo y establece los mecanismos de compensación para el caso que el empleador no las respete. No se trata, pues, de una renuncia del trabajador -que de por sí constituye un acto libre y espontáneo- sino de una situación no voluntaria en que el empleador lo coloca, forzando su desvinculación, lo que le otorga el derecho a obtener las indemnizaciones propias del despido. En ese contexto, se asemeja el autodespido o despido indirecto en todo orden de materias al despido, como acto unilateral del empleador.

SEGUNDO: Que, habiéndose acreditado que el actor ejecutó válidamente en su aspecto formal un despido indirecto, corresponde analizar la efectividad de haber incurrido el empleador en los incumplimientos que se le imputa y si éstos revisten la gravedad



suficiente como para configurar la causal de terminación del contrato prevista en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo.

Tales incumplimientos son: no pago del AFC correspondiente al mes de junio de 2021 y el no pago íntegro de las cotizaciones previsionales ante la AFP Provida, Fonasa y AFC por los períodos comprendidos entre enero a junio de 2021, toda vez que el no pago en FONASA por los períodos correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, y enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2021 fue desestimado en el párrafo primero del considerando séptimo de la sentencia que se reproduce.

TERCERO: Que, para acreditar el no pago del AFC correspondiente al mes de junio de 2021, la parte demandante acompañó, bajo el número 5 de la prueba documental detallada en el considerando cuarto de la sentencia, certificado de cotizaciones emitido por AFC Chile el 29 de julio de 2021, en el que no aparece el pago correspondiente al mes de junio de dicho año. Por su parte, la demandada acompañó, bajo el número 5 de la prueba documental consignada en el considerando quinto, certificado de pago de cotizaciones previsionales emitido por PREVIRED el 13 de octubre de 2021, correspondiente al período enero 2021 a agosto 2021. Dicho documento da cuenta de que el pago correspondiente al AFC del mes de junio de 2021 se efectuó el 16 de agosto de 2021.

CUARTO: Que, así las cosas, el AFC del mes de junio de 2021 fue pagado por la demandada, pero tardíamente. Ahora bien, dicho pago se efectuó con posterioridad a la carta de auto despido, pero con anterioridad a la interposición de la demanda de autos. En dicho contexto, si bien existió un incumplimiento o más bien un cumplimiento tardío, este hecho puntual, aisladamente no reviste la gravedad suficiente



como para configurar la causal de terminación del contrato prevista en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo.

QUINTO: Que, en cuanto al no pago íntegro de las cotizaciones previsionales ante la AFP Provida, Fonasa y AFC por los períodos comprendidos entre enero y junio de 2021, ambas partes acompañaron el contrato de trabajo que las unía, en el cual se establece que la trabajadora tenía una remuneración variable compuesta por un sueldo base, semana corrida, gratificación, comisiones y bonos. Adicionalmente, la parte demandante acompañó certificado emitido por AFC Chile el 29 de julio de 2021 y otro emitido por AFP Provida el 27 del mismo mes y año. A su vez, la demandada acompañó Certificado de alta emitido por la Mutual de Seguridad con fecha 14 de junio de 2019 y certificado de pago de cotizaciones previsionales emitido por PREVIRED el 13 de octubre de 2021 correspondiente a dicho período.

SEXTO: Que, del certificado emitido por PREVIRED se constata que las cotizaciones reclamadas se encuentran pagadas, y del análisis de la prueba documental aportada por las partes para acreditar o no el incumplimiento denunciado, referidas en el considerando precedente, no es posible concluir que efectivamente las cotizaciones correspondientes a AFP Provida, FONASA y AFC hayan sido pagadas en un monto inferior al que correspondía, sin que la carta de auto despido aporte mayores datos para concluir aquello.

Ahora bien, efectivamente la carta de auto despido no ha de ser tan precisa como aquella exigida al empleador en el caso de despido directo, sin embargo, lo cierto es que la demanda interpuesta en estos autos tampoco colabora en esclarecer las diferencias en cuanto al monto de los pagos de cotizaciones previsionales denunciadas en relación con las remuneraciones efectivamente percibidas por la demandante y, de hecho, la demanda ni siquiera se refiere a los pagos de la AFP Provida al consignar los hechos que constituirían el incumplimiento denunciado.



SÉPTIMO: Que, en este orden de ideas, analizada la prueba de conformidad a las reglas de la sana crítica y sin contradecir las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica y teniendo presente que la carga procesal de acreditar los hechos invocados en la carta de auto despedido recaía en la actora, no ha resultado acreditado el incumplimiento en el pago íntegro de las cotizaciones previsionales que se alegó como uno de los fundamentos de su decisión de poner término al contrato de trabajo por incumplimiento grave de las obligaciones del empleador.

A mayor abundamiento, tampoco hay constancia a este respecto que la actora haya denunciado alguna diferencia a su respecto ante la Inspección del Trabajo, en circunstancias que se trataría de seis meses de pago no íntegro, cosa que sí había hecho en el año 2019, conforme da cuenta la respuesta del oficio de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur, Ord. N°38 agregado a estos autos.

OCTAVO: Que, conforme a lo que se lleva dicho, el trabajador no acreditó ninguno de los incumplimientos que imputa a su empleador, de modo que el despido indirecto o autodespido que comunicó con fecha 9 de agosto de 2021 no se ajustó a derecho, debiendo rechazarse la demanda por ese concepto, entendiéndose entonces que el contrato de Magdalena Alejandra Lara Recabarren con la demandada terminó por renuncia del trabajador, conforme lo dispone el inciso quinto del artículo 171 del Código del Trabajo.

NOVENO: Que, consecuentemente deberá rechazarse el cobro de todas las prestaciones que encuentran su fuente en los referidos incumplimientos que no fueron acreditados.

DÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, se cobró en la demanda la remuneración correspondiente a los 8 días trabajados en el mes de agosto de 2021 y el feriado legal, conceptos respecto de los cuales la parte demandada no rindió probanza alguna tendiente a acreditar su



pago, otorgamiento o compensación de dichas prestaciones a través de las respectivas liquidaciones y/o comprobantes idóneos para tal efecto, siendo de su cargo hacerlo, por lo que tales pretensiones serán acogidas íntegramente.

UNDÉCIMO: Que, para el cálculo de las prestaciones citadas en el considerando precedente, no se hará lugar a la base propuesta por la actora en su libelo, teniendo únicamente como base el monto de \$1.371.344, valor correspondiente al promedio de lo consignado en el ítem de haberes en las liquidaciones de remuneraciones de los meses de diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021 respectivamente, incorporadas por la parte demandada en la audiencia de juicio; todo ello al tenor de lo prevenido expresamente en el artículo 172 del Código del Trabajo y efectuada previamente la deducción de las sumas consignadas por concepto de aguinaldo de navidad y bono de vacaciones.

Por estos fundamentos, lo previsto en las normas legales precitadas y en los artículos 7, 8, 9, 63, 67, 159, 160, 162, ,171, 172, y 459 del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que **se rechaza** la demanda por despido injustificado y nulo fundada en el despido indirecto o auto despido ejecutado por doña Magdalena Alejandra Lara Recabarren en contra de la demandada Química Zero Limitada y todas las prestaciones que de ello derivan.

II.- Que **se declara** que la relación laboral habida entre doña Magdalena Alejandra Lara Recabarren, en calidad de trabajadora, y la empresa Química Zero Limitada., como empleador, terminó por renuncia voluntaria de la actora de fecha 9 de agosto de 2021, esto es, por la causal del artículo 159 número 2 del Código del Trabajo.

III.- Que **se acoge** parcialmente la demanda subsidiaria de cobro de prestaciones, sólo en cuanto **se condena** a la demandada al pago de la remuneración correspondiente a los 8 días trabajados en el mes de



agosto de 2021 y el feriado legal formulado en la misma demanda, debiendo la demandada pagar a la actora:

a.- \$234.933 por concepto de feriado legal; y

b.- \$365.688 por concepto de remuneraciones correspondientes a los 08 días trabajados en el mes de agosto de 2021;

IV.- Que las sumas que se ordenan pagar deberán ser solucionadas aplicando los reajustes e intereses previstos en el artículo 63 del Código del Trabajo.

V.- Que cada parte pagará sus costas.

VI.- Que la cantidad antes ordenada deberá ser pagada dentro de quinto día de ejecutoriado el presente fallo, y en caso contrario, pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel para su ejecución.

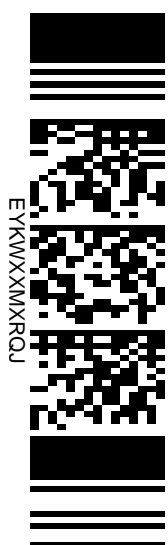
Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante Sra. Yasna Bentjerodt Poseck.

Rol N° 260- 2022 Laboral

Pronunciada por la Quinta Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, presidida por la ministra señora Catalina González Torres e integrada por la fiscal judicial señora Tita Aránguiz Zúñiga y la abogada integrante señora Yasna Bentjerodt Poseck. Se deja constancia que no firma la abogado integrante señor Bentjerodr Poseck, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por estar ausente.





EYKMXMXRQJ

Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por Ministra Maria Catalina González T. y Fiscal Judicial Tita Aranguiz Z. San Miguel, quince de julio de dos mil veintidós.

En San Miguel, a quince de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

